

VII Foro de Biarritz: Intelectuales, raíces y valores frente al debate de la identidad

“Patria grande” y espacio cultural común

Resulta difícil hacer referencia a una identidad latinoamericana como algo definitivo o cerrado. En realidad lo que tenemos por delante es de una complejidad tal que no parece resistir una simple definición ontológica que intente dar cuenta de un cierto “ser” latinoamericano.

Para evitar caer en concepciones cerradas pero al mismo tiempo sin dejar de recoger los factores de unidad que exhiben las sociedades de América Latina, la noción de “espacio cultural común” permite componer una categoría más cercana a la realidad. Éste debe ser entendido como lugar de prácticas diversas, como condensación de valores construidos históricamente, como despliegue de múltiples facetas y, como el desarrollo de múltiples identidades étnicas, nacionales, de género, entre otras. En cierta forma, a través de este espacio es posible visualizar aquello que experimentamos como sensación de pertenencia a una tradición histórica cultural común.

Dicho espacio cultural se constituye como contraparte de ese complejo fenómeno que ha dado lugar a sociedades intensamente híbridas, en las que coexisten y se amalgaman las raíces indígenas y afroamericanas, la herencia ibérica, europea, árabe, judía y asiática. El resultado ha sido: sociedades de temporalidades mixtas y yuxtapuestas en las que confluyen una mezcla incesante de mundos “modernos”, “premodernos” y “posmodernos”. Se trata entonces de un espacio en el que la diversidad cultural y la heterogeneidad estructural dan forma a una matriz de identificación colectiva –abierta y dialógica-, una unidad en la diversidad cuya fecundidad radica en el mestizaje. Un espacio, finalmente, que desborda los límites territoriales de la unidad geopolítica que enmarca a América Latina e incluye a los millones de latinoamericanos residentes en Europa y en Estados Unidos.

Sin embargo, y ante los cambios ocurridos en los últimos treinta años en el sistema capitalista, con especial incidencia sobre la forma Estado-nación, la necesidad de trascender el horizonte nacional y construir visiones más amplias que recojan la tradición de una unidad latinoamericana o iberoamericana, enclavada en el acervo

cultural de la región, ha recobrado vigor en el escenario intelectual y político en este comienzo de siglo. Fundamentalmente lo ha hecho aquella que vuelve a poner el acento en el desarrollo de las capacidades endógenas y en la integración como un proceso atravesado por valores y culturas, por cuya complejidad no puede limitarse a lo estrictamente comercial y económico (como aparece aludido en general bajo el término “regionalismo”).

Esta necesidad de pensar América Latina desde adentro, desde su especificidad, buscando una mirada propia sobre lo que es propio, y afirmar así al mismo tiempo la importancia de su unidad, es una constante compartida por una larga tradición del pensamiento latinoamericano. Los primeros exponentes pueden encontrarse en los pensadores de la independencia: Simón Bolívar, José Gervasio Artigas, José de San Martín. Para ellos la patria era la unión de todas las porciones de la América española. La intención no era otra que la de unir en un mismo Estado o en una Confederación de Estados a los pueblos libres de Hispanoamérica. El proyecto bolivariano de conformar primeramente una confederación que incluyera a España (1822) o como alternativa una alianza entre las repúblicas con un ejército común y una serie de políticas económicas preferenciales, posibilidad que fracasa en Panamá en 1826. En ellos se plasmaba la conciencia de compartir una unidad de origen y de destino. Tal era la cifra de la identidad, por entonces hispanoamericana (de la que Brasil quedaba afuera), que encontraba eco en el pensamiento de los hombres de la primera década revolucionaria.

Esta línea se vería interrumpida, cuestionada, por las posiciones liberales-elitistas que terminaron imponiéndose, tras las independencias, en los nuevos estados. Las matrices de cuño liberal que dieron forma a las nacientes repúblicas americanas se asentaron sobre ciertos estereotipos que impidieron el cultivo de la conciencia integracionista y continental. Plasmado en la consigna “civilización o barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento, lo local y autóctono quedaba subsumido a las exigencias que imponía una imagen del desarrollo cuyo espejo eran las principales potencias europeas. El modelo a imitar venía necesariamente dado y su importación revertiría las condiciones de atraso político, económico y cultural que exhibía la base social y colonial de los países de América.

Los integrantes de la Generación del 900 retomaron con fuerza la consigna integracionista. Este grupo de pensadores y literatos que inició su proclama con la publicación en febrero de 1900 del *Ariel* de José Enrique Rodó, se vincularía

también con los escritores españoles de la generación del 98, como fue el caso de Miguel de Unamuno. El ideario de Rodó encuentra en el Ariel una primera vía, un punto de partida para afirmar la unidad de América Latina señalando como uno de sus rasgos distintivos la herencia latina. Esta unidad es cultural: “En los pueblos de la América Latina en esta viva armonía de naciones vinculadas por todos los lazos de la tradición, de la raza, de las instituciones, del idioma, como nunca las presentó juntas y abracando tan vasto espacio la historia del mundo, bien podemos decir que hay algo más alto que la idea de patria, y es la idea de la América concebida como una grande e imperecedera unidad”¹. En medio de un fuerte crecimiento de las clases medias urbanas y ante el impacto del aluvión migratorio, aún con sociedades dependientes de estructuras agropecuarias, el pensamiento de Rodó encuentra como eje de sus críticas el impulso presente en las elites a “desnaturalizar el carácter de los pueblos, -su genio personal para imponerles la identificación con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad irremplazable de su espíritu-”², aquella tendencia a la “nordomanía” que en otras ocasiones difunde la creencia “ingenua de que eso pueda obtenerse alguna vez por procedimientos artificiales e improvisados de imitación”³. Es en la incapacidad de resolver la tensión bipolar entre costumbre e innovación, entre tradición y progreso “procurando adaptar, hasta donde fuese posible, lo imitado a lo propio”⁴ lo que caracteriza la problemática central latinoamericana. Problemática que hunde sus raíces en el momento inmediatamente posterior a la independencia, tras la conformación de la oposición entre “liberales” y “conservadores”.

La ola que propició un regreso de América Latina a sí misma, a su historia y cultura común se propagó en otros integrantes de la misma generación. José Vasconcelos, que acababa de publicar en 1925 *La raza cósmica*, a la par que insistía en América Latina como espacio de fusión de todas las razas –blanca, negra, amarilla-, señaló hacia 1929 como parte de su programa de gobierno, el rescate de la personalidad continental, la defensa contra el antiimperialismo, la nacionalización de los recursos y la creación de escuelas de orientación iberoamericana, entre otros puntos. Manuel Ugarte, Rufino Blanco Fombona y José Martí, entre otros, formaron parte también del pensamiento de la “Patria Grande”. Ya en la “Revista Nacional”, publicada en Montevideo, Rodó recogía la gesta de la independencia y proclamaba en el plano literario la necesidad de abordar la “unión espiritual latinoamericana”. Para estos

¹ E. Rodó, “Ariel” en *Obras Completas*, p. 497, Aguilar, Madrid, 1957.

² E. Rodó, op. cit, p. 517.

³ E. Rodó, op. cit, p. 533.

⁴ E. Rodó, op. cit, p. 286.

autores, el fecundo proceso de mestizaje que se estaba gestando en América no sólo era un elemento inédito y distintivo del continente, su identidad y su fuerza más importante, sino que también lo era la vuelta a esa conciencia de una historia común y de un destino compartido de los primeros hombres de la independencia. Inversamente, el mayor peligro para el desarrollo pleno de la región residía en el imperialismo. Sostenido sobre una hegemonía industrial que se proyectaba controlando las fuentes de producción, los efectos del imperialismo se traducían en una “balcanización” del continente.

De camino a la primera Guerra Mundial, el capitalismo de los imperios, con su particular división internacional del trabajo (que asignaba a los países periféricos el rol de productores de materias primas) ya había comenzado a crujir. Su contrapartida, en cambio, las clases terratenientes, las oligarquías nacionales que funcionaban en estrecha vinculación y asociación con aquella lógica imperial, comenzarán a enfrentar las presiones populares y de los movimientos obreros bajo las que se irán estructurando las causas nacionales. Como ocurriera con los otros integrantes de la generación del 900, Manuel Ugarte encara con una serie de soluciones la compleja problemática contemporánea que se despliega ante su mirada crítica: la defensa del arte nacional, la búsqueda de respuestas propias para nuestros problemas (evitando vivir de “reflejos”), el desarrollo de la industrialización, la intervención del Estado para evitar la transferencia de recursos hacia los polos más concentrados (lo que “lleva a que el trust la absorba a favor de la plutocracia”), la nacionalización de los servicios públicos, la distribución de las tierras mediante una reforma agraria que permita desterrar el latifundio y una legislación social que acompañe la transformación de sociedades asentadas sobre modelos agroexportadores hacia otras más industrializadas.

Las reivindicaciones antiimperialistas e integradoras encuentran eco un tiempo antes de la crisis del 30 en el APRA, fundado en 1924 y liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre. A la búsqueda de una unidad política latinoamericana (latinoamericanismo “revolucionario”) se une su llamado a actuar contra toda forma de imperialismo, formulaciones que se cruzan con la necesidad de proclamar la internacionalización del Canal de Panamá y de subrayar la importancia de la ser solidarios con los pueblos y las clases oprimidas del continente. Noción como las de “raza” o “Hispanoamérica” comienzan a ser reemplazadas por la de “Latinoamérica” en el pensamiento del líder peruano. Sin embargo, en su discurso es predominante la

mirada económica y la defensa de un desarrollo endógeno que se veía oprimido por causas internas y externas (imperialismo).

Las anteriores concepciones integracionistas fueron recuperadas por los movimientos nacional-populares posteriores a la crisis de 1930, como es el caso de los gobiernos de Getulio Vargas, Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, entre otros. En ellos se inscribiría la necesidad de recuperar la unidad latinoamericana dentro de un proceso democratizador e integrador a nivel social, en el que la industrialización se convirtió en el eje de la transformación económica, en oposición a la organización social de la tradición oligárquica asentada, como decíamos, sobre modelos agroexportadores. Si bien en algunas de estas posiciones el acento fue puesto en América del Sur como columna vertebradora del proceso integrador, ello tenía un fundamento estratégico. En los términos en que Juan Domingo Perón propuso el ABC (Argentina, Brasil, Chile), uno de los objetivos centrales era conformar un polo de poder a partir del cual realizar la integración de los “Estados Unidos de América del Sur”.

Con un sesgo estado céntrico, con una estrategia orientada a la industrialización sustitutiva, de carácter semi-proteccionista y volcada al mercado interno, bajo los gobiernos nacional-populares se expandió el espacio de la sociedad civil, se fortaleció la estructura estatal y la organización de los sectores medios y populares a través de los sindicatos de obreros y campesinos, de las organizaciones empresariales, los movimientos políticos y otras iniciativas asociacionistas. La industrialización, la urbanización y la educación fueron los pilares sobre los que se asentaron las bases del desarrollo. De la mano de los gobiernos nacional-populares, no sin dificultades, se sentaron las bases para la incorporación de los sectores medios, populares y campesinos (aunque estos últimos en menor medida) a la arena política y a las políticas.

La integración regional fue vista como un espacio privilegiado para afirmar principios de defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de los países miembros (independientemente de las exigencias de agenda de los países centrales), para la oposición a toda intervención en los asuntos internos de los países y, para el despliegue de una agenda económica y de seguridad que responda a las necesidades regionales. A lo largo de este período, entre 1930 y 1970 (no sin interrupciones), el capitalismo oligárquico entró en una etapa de retroceso perdiendo su carácter excluyente.

El avance social y económico registrado por la región fue acompañado por condiciones internacionales propicias en lo que puede señalarse como una fase de alza dentro de los ciclos del sistema capitalista. Para tener una idea de lo que ello ha significado, se puede señalar que la tasa anual de crecimiento de la producción *per cápita* entre 1950 y 1973 en las principales economías del mundo (Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña) estuvo en torno a una media del 4,4%. Si lo que se enfoca es el PBI *per capita*, se puede decir que la media mundial se ubicó cerca del 2,9%. En América Latina, en el mismo período, el producto interior bruto se ubicó en un 5,3%, contrastando con el 3,4% del período 1913-1950 y con el 2,8% de 1973-1992. De manera equivalente, el PBI *per cápita* se situó en el 2,5% entre 1950 y 1973 a diferencia del 1,5 del período 1913-1950 y del 0,5 de 1973-1992. Sin embargo, el retorno de la oligarquía de la mano de las dictaduras militares terminaría por consolidar, hacia mediados de los años 70, un modelo productivo altamente excluyente y desigual.

Con un fuerte componente desarrollista y centrada en el terreno económico y comercial, las aspiraciones a la integración latinoamericana estuvieron presentes en la creación en 1948 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La mirada integracionista encontró en las posiciones de Raúl Prebisch un giro para pensar modelos de desarrollo que permitieran a la región salir de la situación de periferia. Bajo sus categorizaciones tomaba forma un capitalismo “subsidiario”, “apendicular”, “subordinado” a los intereses de los países más avanzados que imponían su hegemonía con un capitalismo “centrípeto”. El carácter mismo de esta lógica global hacía imposible un desarrollo de los países periféricos, a menos que se quiebren las condiciones que los mantenían ligados al motor central. La integración latinoamericana formaba parte de una visión estratégica más completa en la que se desatacaba la necesidad de promover la industrialización, de propiciar una redefinición de la política arancelaria, de buscar una transformación del sistema internacional por la vía diplomática y proteger las industrias que estaban emergiendo. En la “Teoría global del desarrollo” se retoma la necesidad de pensar los problemas latinoamericanos desde adentro. En su formulación, Prebisch hace explícita la ausencia de estudios sobre el capitalismo periférico, capaces de dar cuenta de su especificidad.

Si bien en un principio el acento estuvo puesto en la continuidad de los diferentes procesos de sustitución de importaciones, en una segunda instancia, más ligada a la

“teoría de la dependencia”, el trabajo se centró sobre los componentes de dicha dependencia tales como las dinámicas centro-periferia (asentada sobre la división internacional del trabajo), el papel de las elites locales (grupos minoritarios nacionales con alta concentración del capital) fuertemente vinculadas a los sectores productivos de los países centrales (“comunidad de intereses” entre los grupos dominantes locales y externos), el deterioro general de los términos de intercambio, y los procesos de acumulación y desviación de la inversión, entre otros. Esta etapa de la segunda posguerra fue también la de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de Estados Centroamericanos y de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en 1960, que luego se transformaría en la ALADI. Todos ellos en buena medida fruto de la inspiración integracionista que volvía a extenderse por América Latina, aunque ya con una marcada tendencia hacia la primacía de los factores económicos y comerciales.

La revolución cubana, a su manera, significó también una mirada de América Latina como unidad. Desde esa perspectiva se asumió una visión alternativa para pensar a América Latina desde adentro, aunque en este caso se exacerbó una mirada tendiente a comprender la dependencia como un fenómeno continuo, con diferentes fases (España, Gran Bretaña, EEUU), sin recuperar los procesos de protagonismo y movilización social.

Las Conferencias Episcopales Latinoamericanas promovidas por el CELAM también se convirtieron en un eje para vertebrar la idea de unidad, el rescate de la cultura latinoamericana y de la religiosidad popular.

Hacia la década de 1980, con la recuperación de la democracia en buena parte de los países de la región y ante un panorama internacional que ya mostraba signos de estar transitando un marcado cambio de época, el Estado si bien continua teniendo una importancia central y desarrolla un papel importante, ya no aparece como el único actor de la escena global ni presenta la misma fortaleza que lo caracterizaba en el pasado. Sometido a un movimiento en dos direcciones, que impulsa por un lado hacia la descentralización de las economías nacionales y, por el otro, hacia una recentralización a nivel regional con la intención de contar con la capacidad suficiente como para hacer frente a la nueva dinámica global, se retomaron las sendas de los procesos de integración esta vez a través de la conformación de mercados regionales en los distintos subsistemas latinoamericanos: MERCOSUR, Comunidad Andina, Centroamérica y El Caribe.

Tras este recorrido, en medio de un proceso de reorganización de la forma Estado-nación y de resignificación de la política, la integración latinoamericana y la consolidación de un espacio cultural han vuelto a aparecer como una tarea inconclusa.

Ambas cuestiones resultan elementos estratégicos para atender las especificidades de cada uno de los países en un contexto en el que, a pesar de los procesos de desterritorialización y transformación del sistema capitalista, las identidades siguen siendo las instancias que proporcionan el sentido capaz de orientar nuestras acciones hacia lo que queremos ser y, además, las que atraviesan todas las producciones materiales e inmateriales que forman parte del acervo pasado, presente y futuro de nuestros pueblos.

Particularmente cuando, al inicio del siglo XXI, América Latina enfrenta el triple desafío de insertarse en un mundo globalizado, en medio de una profunda transformación económica, tecnológica y cultural; de hacerlo sin resignar un desarrollo integral y sostenible, en el que sea posible recuperar la justicia social como eje vertebrador de sociedades que exhiben los más altos índices de desigualdad; y de extender y afianzar los procesos de integración regional en un momento en que la soberanía estatal está siendo vulnerada por el alcance y la lógica de diferentes fenómenos, poniéndose en juego además la conformación de un orden internacional más justo y equilibrado en el cual definir la posición de Latinoamérica.

La referencia a América Latina indica entonces no tanto una realidad pre-existente, mucho menos una esencia inmutable a la que debemos llegar por medio de una serie de depuraciones, sino más bien un proyecto a realizar, una suerte de “identidad proyecto” que es en sí misma la matriz de cualquier intento de integración latinoamericana.

Los procesos de integración requieren entonces de un equilibrio de las dimensiones económicas y comerciales con las históricas y culturales que, en el caso de América Latina han sido las más desatendidas. La falta de una “política de la cultura común” se produce justamente en una región que tiene como principal acervo la

convergencia cultural. Paradójicamente en ello radica la fuerza del ideario latinoamericano, ése es el vértice a partir del cual proyectar una identidad sobre la cual montar procesos de integración sólidos y con efectiva presencia a nivel global. La consolidación de un espacio cultural común discurre en este sentido.

En especial en un sistema internacional en el que se ha profundizado la interdependencia entre estados y regiones, acentuando el carácter parcial de las mismas. Un sistema recorrido por tensiones y asimetrías definidas por diversas formas de dependencia económica y subordinación política, las que hunden sus raíces en la historia y responden, no sólo al modo en que los países definieron su inserción en la economía global, sino también a los modos de división del trabajo y la producción establecidos a nivel internacional.

Será este espacio el que le permita a la región aprovechar no sólo su potencial cultural sino, al mismo tiempo, hacer de la capacidad de simbolizar una autonomía en el nivel cultural, un paso necesario para que aparezca una fuerza política propia. A diferencia del carácter comercial con el que se han identificado los distintos procesos de integración (particularmente desde los años 50 en adelante), se trata mas bien de tomar como punto de partida la capacidad política de afirmar verdaderamente el enunciado cultural que nos identifica para luego sostener estrategias conjuntas para el desarrollo económico y comercial.

América Latina en un cambio de época

En medio de un contexto de cambio de época como el que se impone hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70, el sistema capitalista asiste a una fase recesiva que aún hoy perdura y que, en estos poco más de treinta años, ha afectado seriamente las condiciones de posibilidad del Estado de bienestar construido tras la segunda guerra mundial.

A la par, ha ido emergiendo lo que puede caracterizarse como una nueva dinámica social, teorizada como sociedad del conocimiento. En este proceso, la transformación tecnológica (informática, microelectrónica, telecomunicaciones y genética) ha creado condiciones materiales hasta ahora inexistentes, reconfigurando los modos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, generando un impacto igualmente trascendente en el terreno de la cultura y de las identidades.

A este conjunto de procesos y a sus consecuencias los denominaremos “cambio de época”.

El debilitamiento del Estado de bienestar adquirió forma a lo largo de la década de 1970, cuando las principales economías del mundo se encontraban en medio de una crisis de alcance internacional. La fase recesiva en que entró el sistema luego de los “años dorados” del capitalismo, se ha caracterizado por una tendencia decreciente de la tasa media de ganancia acompañada por una fuerte inversión en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, muchas de ellas provenientes del terreno militar y armamentístico. Como resultado de este proceso global en el marco de una onda larga del desarrollo capitalista, al igual que en el resto de los países, en América Latina se dieron ciclos de recesión acompañados por inflación estructural, con el consiguiente debilitamiento del patrón de desarrollo industrial y un incremento de las tasas de desempleo.

Si bien el crecimiento de las economías más importantes del mundo continuó, éste tuvo un ritmo muy lento. El clima de mayor competencia a nivel internacional fue una resultante directa de las nuevas condiciones. La reconversión industrial aplicada en los países centrales transformó las condiciones de los términos de intercambio. La mayor competencia tuvo un profundo impacto sobre el comercio internacional, signado por el proteccionismo y el escalonamiento de los productos con alto contenido tecnológico. Las consecuencias sobre las economías de África, Asia occidental y América Latina y el Caribe no tardaron en hacerse evidentes. La incapacidad para revertir los procesos de desindustrialización se tradujo en deficiencias estructurales que minaron la calidad de acceso al comercio internacional. En este clima de fuerte competencia, las economías nacionales de los países en desarrollo comenzaron a ser vistas por los propios gobiernos como estrategias nacionales para integrarse a un orden internacional, exacerbando el “desarrollo hacia fuera”.

La década de 1980 fue un punto de inflexión para que las economías de América Latina pusieran en evidencia las dificultades del sector público para financiarse. La “década perdida” quedó signada por tres fenómenos: la crisis de la deuda (con el aumento de la tasa de interés y la salida de flujos de capitales), la recuperación de la democracia y el estado de derecho, y las políticas de ajuste estructural. Estas últimas son particularmente las que terminarán por imponer una nueva relación entre estado, economía y sociedad.

Este fue un escenario, además, en el que los estados nacionales (y con ellos las instancias políticas) se encontraron sometidos a una fuerte erosión que puso en entredicho la noción misma de soberanía. Demasiado restringidos al territorio, los mecanismos políticos tuvieron cada vez mayores dificultades para hacer frente a una serie de fenómenos de índole económica, financiera y comunicacional que operan por fuera del alcance de la acción estatal. Ello fue el resultado de las actividades desplegadas por aquellas instancias transnacionales: flujos financieros y comerciales, empresas multinacionales, industrias culturales, células terroristas y delictivas y desplazamientos migratorios.

Este desborde por arriba de las capacidades estatales coexiste con una fragmentación interna, la que se agudiza con la desigualdad y la pobreza, y se manifiesta también con un repliegue de lo público frente a un avance del espacio privado y del impulso privatizador que se ha extendido por América Latina de manera particular durante la década de los noventa. Este es un proceso de fragmentación que coexiste con la descentralización de competencias que ha buscado fortalecer la instancia local, revitalizando los municipios, las regiones y las provincias. Bajo este enfoque, la cercanía a los problemas cotidianos de la población, la presencia de organizaciones sociales y su articulación con las instancias públicas, la puesta en funcionamiento de programas de participación ciudadana, todo ello en un contexto de mayor horizontalidad, hace que se propicien mejores condiciones para la innovación y la actualización.

En la esfera local, por otra parte, es donde se produce también una mayor condensación de los problemas sociales, de las manifestaciones sociales por demandas insatisfechas, de pujas de diverso tipo. Es allí donde cobra fuerza con más crudeza la dicotomía entre las inversiones de mediano plazo y los requerimientos por obtener resultados en el corto plazo, es decir por la intersección entre los tiempos de acción de las políticas públicas, los tiempos electorales, los burocráticos y los de los propios beneficiarios.

Tiempo y espacio se vuelven entonces categorías complejas para políticas que siguen ancladas al territorio y a la soberanía del estado-nación. El espacio que ha abierto frente a nosotros la actual fase del proceso de globalización, principalmente a partir de las tecnologías de comunicación y la telemática, trasciende y atraviesa los espacios locales y nacionales.

Así como lo pusieron de manifiesto las exigencias del mercado global o las cambiantes condiciones del capital financiero transnacional, de igual manera ocurre con los intercambios culturales y comunicacionales. La política no alcanza a dar cuenta de la dispersión de una serie de fenómenos económicos, financieros y comunicacionales que la trascienden y que escapan a su capacidad para dotarlos de sentido. Mientras el territorio nacional sigue siendo el espacio donde se realizan y se concretan valores universales como la democracia, la justicia y la ciudadanía; la dinámica global presenta nuevos actores (corporaciones, bancos, organismos, organizaciones, estados, etc.) y una lógica que pone límites a la capacidad del Estado para administrar completamente las variables que afectan a su población. Sin embargo, y a pesar de esta contradicción, no aparecen de momento alternativas consistentes para anclar lo que de diversas maneras se ha indicado como ciudadanía internacional, comunidad mundial o espacio público global. El espacio transnacional sigue siendo un continuo en el que no es posible realizar las exigencias de representación, ciudadanía y sociedad civil ya que su sola existencia reclama como contraparte (aún cuando se encuentre debilitado en su contexto) la existencia de la forma Estado-nación.

Es evidente, por otra parte, que la nueva cuestión social es una de las consecuencias del actual cambio de época. Sectores medios pauperizados, con un incremento de la pobreza estructural y de la desigualdad, un desmantelamiento de las instituciones que hicieron posible el estado de bienestar y la sociedad salarial, una cierta primacía de la gestión empresarial de las vidas, con el predominio de las trayectorias biográficas en el ámbito laboral, un fuerte deterioro de las identidades colectivas y un cambio sustancial en las dinámicas familiares son algunos de los factores que definen una realidad que se ha transformado completamente en un lapso relativamente breve de tiempo.

La impronta neoclásica que acompañó a los procesos políticos y económicos iniciados a mediados de los años 70, se afianzó tiempo más tarde con la caída del Muro de Berlín (1989) y el desmantelamiento del sistema soviético. Ambos hechos ampliaron las bases políticas para un despliegue hegemónico de lo que luego se conocería como “pensamiento único” y que hacia los años 90 terminaría por imponerse como relato global.

Es precisamente en la década del 90 cuando el llamado Consenso de Washington (1990) prescribió un paquete de políticas de aplicación para toda América Latina, modificado en parte (aunque no en espíritu) por las reformas de “segunda generación” (1996). Sobre la base de una consolidación de la vida democrática en el nivel político, en el terreno económico, el Consenso echó a andar una serie de políticas destinadas a profundizar aún más la apertura de las economías, la desregulación y eliminación de las trabas al comercio de bienes y servicios, avanzando al mismo tiempo en la privatización de las empresas públicas, la liberalización del movimiento de capitales y la flexibilización del mercado laboral, entre otras.

Reducido a su mínima expresión, el Estado se convirtió en un simple “articulador” entre las economías nacionales y las demandas de la economía mundial. El proceso de reconversión del Estado, institución que había desempeñado un rol histórico en Latinoamérica articulando y organizando la vida social, significó una profunda transformación de su relación con la sociedad y la economía.

Si bien se logró contener los desequilibrios inflacionarios que habían arruinado a la región en la década anterior, los niveles de crecimiento conseguidos no alcanzaron para revertir las consecuencias sociales que el nuevo modelo de acumulación estaba generando. Por esta razón, en el inicio del nuevo milenio América Latina adquiere un rasgo particular: el de consolidar sociedades “policéntricas” y “pluriconflictivas”, sociedades en donde la exclusión, la inequidad y el riesgo se asocian (y se profundizan) cuando se las combina con la desconexión respecto de los centros y las redes de información y cuando se acentúa el desconocimiento sobre el manejo de los códigos requeridos para tomar parte en ellas.

La desintegración social generó también que las identidades y sus procesos de constitución fueron puestos en el centro de la problemática junto con la necesidad de determinar en qué grado inciden sobre ellas las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales; cuál es la tensión entre procesos de integración regional y movimientos nacionalistas, entre diversidad cultural y uniformidad jurídica; cómo comprender la problemática construcción del vínculo social y de la democracia en

sociedades fragmentadas, cruzadas por la pobreza, la exclusión, la desigualdad y el avance de individualismos y comunitarismos de distinto signo.

Mestizaje, desigualdad e interculturalidad

Tanto las situaciones de crisis como los momentos de cambio histórico, tal y como ocurre en la actualidad, ponen en juego recurrentemente la pregunta por la identidad. Esta es una pregunta en la que se recoge la propia experiencia histórica de América Latina, su mestizaje cultural como rasgo definitorio de una identidad que es al mismo tiempo un magma conformado por múltiples y variados elementos en permanente tensión y conflicto.

Este mestizaje cultural, que como proceso, a mi entender, se remonta en la profundidad de la historia al menos a 1492, así como los incesantes procesos de hibridación a los que hace referencia Néstor García Canclini⁵ llevan a “abrir” la noción de identidad. En lugar de caer en definiciones cerradas que contengan identidades producidas a fuerza de abstraer determinados rasgos (lengua, tradiciones, raza), generalmente desprendidos del proceso histórico y de su propio devenir, de lo que se trata es de captar el incesante flujo de apropiaciones, elaboraciones, rupturas, distancias y confluencias culturales, las que se potencian a partir de la presencia de una serie de repertorios heterogéneos de bienes y mensajes que se encuentran disponibles en los circuitos transnacionales. En este proceso, sin embargo, no sólo se produce una permanente fusión, intercambio y reelaboración sino también nuevos modos de segmentación, segregación y diferenciación.

En el caso de América Latina, tal y como en el Ariel de Rodó, el eje de tensión se instala en la permanente reelaboración de los elementos simbólicos europeos, por un lado, y los nativos, por el otro. El mestizaje aparece entonces como ese espacio de fusión en el que se funda el conflicto esencial de la subjetividad latinoamericana y su particularidad más distintiva.

Por un lado el mestizaje es el espacio privilegiado donde se gestan las manifestaciones culturales más propias de la región: el barroco, el realismo mágico, la religiosidad popular, además de otras expresiones del arte, la urbanística, la

⁵ N. García Canclini, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Madrid, Paidós, 2001.

música y la danza, incluida la misma naturaleza que con su exuberancia define el paisaje de los países caribeños. En el mestizaje como categoría resuena la idea de “barroco” que define la mirada de Alejo Carpentier y su definición de América Latina como la tierra de elección del barroco: “Nuestro arte fue siempre barroco: desde la espléndida escultura pre-Colombina y el de los Códices, hasta la mejor novelística actual, pasándose por las catedrales y monasterios coloniales de nuestro continente. Hasta el amor físico se hace barroco en la encrespada obscenidad del ‘guaco peruano’⁶.”

Como expresión del cambio, de la transformación y de la transmutación de las sociedades, el barroco expresa una constante que está presente en todos los tiempos y en las diferentes culturas, pero muy particularmente en la latinoamericana. En él se cifra nuestra identidad. El barroco se presenta entonces como expresión del mestizaje étnico y cultural, de la *criolledad* que es atributo y destino de los pueblos de la América Latina. Un sentido de lo criollo, de lo mestizo que se profundiza y se actualiza cuando toma conciencia de ser una simbiosis. Para Carpentier lo que aparece como nuevo en Latinoamérica es la conciencia de ser barroco, la idea clara y distinta de que nuestro estilo propio es necesariamente barroco porque toda simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo. De modo que lo barroco es, en estos términos, la expresión de la multiplicidad tanto del origen como de las manifestaciones de los problemas que sufrimos, pero también de nuestras riquezas culturales y de las herramientas con que contamos para resolverlos.

En este sentido el mestizaje opera como una posibilidad para el cambio y la transformación de nuestras realidades sobre la base de las diferentes culturas que, al converger, se han vuelto una fuente de creatividad inmensa.

Pero por el otro, el mestizaje es también la evidencia de una compleja superposición de espacios y tiempos en los que coexisten una simultaneidad de modernidades y tradiciones. Espacios y tiempos fragmentados, “sociedades de transición” en las que conviven lo premoderno, moderno y lo posmoderno, las formas de producción artesanal, fordista y posfordista.

Reverbera aquí la problemática de los dos *lógos* a los que ha hecho referencia Rodolfo Kusch. Uno dominado por la tradición occidental, depositario de la

⁶ A. Carpentier, "Lo barroco y lo real maravilloso" en *Razón de ser*, pp. 41-46, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1976.

secularización, el individualismo y la racionalidad de tipo instrumental. El otro, en cambio, sujeto al mundo nativo, al sentido mítico y religioso de una organización que se asienta sobre la dimensión colectiva antes que sobre las particularidades individuales. El mestizaje como identidad latinoamericana pone en juego así la superación de aquellas visiones dicotómicas en las que el cambio social es visto únicamente como el avance de lo moderno sobre lo tradicional, incluso a costa de la aniquilación de este último.

Sin embargo este mestizaje cultural debe ser pensado a partir del alto nivel de desigualdad que exhiben las sociedades latinoamericanas, con la consiguiente fragmentación social y debilitamiento del entramado social. La diferencia, la desigualdad y la desconexión, en el decir de Néstor García Canclini⁷, configuran los ejes interpretativos para dar cuenta de la actual realidad de la región, en un momento en que la hibridación se potencia a partir de la presencia de dinámicas de alcance global.

Desde esta perspectiva resulta evidente que el espacio cultural común se encuentra atravesado además de por aquellas distorsiones y desigualdades que se enmarcan dentro de la distribución económica, por aquellas otras que se nutren de un inequitativo acceso al conocimiento y a las tecnologías, vinculadas además (en la mayoría de los casos) a históricos procesos de discriminación racial (practicada fundamentalmente contra indígenas, mestizos, afrodescendientes y campesinos), además de otras minorías vinculadas con el género o la religión. Procesos acometidos en nombre de la homogeneidad reclamada por un Estado-nación, una racionalidad modernizadora sostenida sobre la idea de progreso y un estrecho concepto de ciudadanía, fuertemente ligada a lo político.

La profundización de estructuras económicas y sociales fragmentadas se traduce entonces en un desigual acceso a los mercados de capitales, a la ciudadanía, a la educación, a la tierra, a la salud, a la tecnología, a la justicia y a la participación en las decisiones políticas, medios efectivos para garantizar que los objetivos sociales estén representados en las agendas y decisiones públicas.

Para que ello sea posible, es necesario conciliar el respeto por las diferencias culturales y de valores con políticas económicas y sociales que hagan viable los

⁷ N. García Canclini, *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Gedisa, Buenos Aires, 2004.

diferentes proyectos de vida. Avanzar hacia una "integración-sin-subordinación (que) pasaría por el doble eje de los derechos sociales y los culturales, en que una mejor distribución de activos materiales va de la mano con un acceso más igualitario a los activos simbólicos (información, comunicación y conocimientos). Todo esto, con una presencia más equitativa de los múltiples actores socioculturales en la deliberación pública, y con un pluralismo cultural encarnado en normas e instituciones"⁸.

El reclamo de los movimientos étnicos, raciales, regionales y de género a favor del derecho a su propia memoria, a la construcción de sus propias narraciones e imágenes, se inscribe en la conciliación de las tensiones que atravesaron históricamente la identidad latinoamericana, recogida en la visión del Ariel. Los movimientos indígenas, la marginación de los afrodescendientes, de los Sin Tierra, el desplazamiento de las poblaciones campesinas, están reclamando una nueva institucionalidad cuyo eje es en buena medida el concepto mismo de ciudadanía. En todo caso se trata de actores que buscan en muchas ocasiones ser parte del Estado y no tener un "Estado aparte", quieren ser actores de la política nacional y de la redefinición del Estado-nación.

Un concepto de ciudadanía que exceda al régimen político como mero ejercicio de los derechos políticos (e incluya los derechos civiles, sociales y culturales). Tiene sentido la pregunta que se formulara Norbert Lechner: "¿Por qué dar por sentado que la homogeneidad favorece el entendimiento pacífico y considerar la heterogeneidad como fuente de conflicto?"⁹.

En este contexto, pensar la multiculturalidad como interculturalidad significa impulsar políticas capaces de transformar el proyecto de nación en un proyecto asentado sobre la idea de una ciudadanía más allá de la raza, del sexo, de la edad o la religión; revisar y promover cambios en las políticas educativas y culturales, en el orden jurídico y en el político. Pero también implica recoger el proyecto de la "Patria Grande". Lo que se halla frente a nosotros es la posibilidad de saldar una histórica deuda interna que se actualiza en la forma de la marginación, la pobreza y la exclusión de un gran número de latinoamericanos.

⁸Martín Hopenhayn, "El reto de las identidades y la multiculturalidad", p. 6, Revista Pensar Iberoamérica, Nº 0, Madrid, Febrero 2002.

⁹ N. Lechner, *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*, p. 163, FCE, México, 1995.

Políticas para la consolidación de un espacio cultural común

Parece necesario que la integración latinoamericana busque un mayor equilibrio entre las dimensiones económico-comerciales y aquellas político-culturales. Si la integración del 900 había puesto el acento en lo histórico cultural, a partir de los años 50 lo comercial ha ocupado un lugar más destacado en los planteos integracionistas. Sin embargo, aún hoy resulta fundamental insistir en la necesidad de poner el acento en el desarrollo de políticas que articulen el espacio cultural común como condición necesaria para el progreso económico. En otras palabras, se trata de aprovechar la fuerte base cultural para poder aunar un tejido conectivo económico que es débil.

Como se ha señalado, el debilitamiento de la capacidad de decisión de las comunidades políticas, como consecuencia de las fuerzas y factores de poder que actúan a nivel transnacional, hacen difícil compensar las condiciones de desigualdad recurriendo exclusivamente a mecanismos y políticas de distribución de alcance local o nacional. En este punto vuelve a insertarse el proyecto de la "Patria Grande". En ella se pone en juego nuestra capacidad para dialogar críticamente con los problemas de la globalización desde las preocupaciones de nuestra propia identidad.

Será a partir de este diálogo crítico que la política articulará los deseos de cambio (las aspiraciones de un futuro mejor), las expectativas (sobre cuáles son los futuros probables) y las preferencias (de acuerdo a las opciones que se encuentran a disposición dentro de las limitaciones que impone los sistemas). En cada una de estas instancias se pone en juego la conformación de una subjetividad capaz de acompañar el proceso de modernización, de manera tal que las personas sean los sujetos efectivos del cambio y no los sistemas. En caso contrario, la modernización se convierte en un fin en sí misma.

La construcción de un proyecto y su consolidación como identidad abierta y dinámica requiere, como es evidente, emprender acciones destinadas a desterrar toda pretensión de desigualdad. Ello va de la mano, en primera instancia de la construcción de estilos de desarrollo integrales, lo que conlleva, además, a una expansión positiva de los derechos de los que menos tienen. Una expansión de derechos sociales como la educación, la asistencia, la vivienda o el trabajo, pero también de derechos como el de participar en la vida pública o el de gozar del

reconocimiento y de la aceptación de sus prácticas culturales. En caso contrario, las diferencias continuarán transformándose en desigualdades. Este es el nudo por el que pasan las relaciones entre identidad y desarrollo en una sociedad del conocimiento como la que asoma en el horizonte del siglo XXI.

Ahora bien, el espacio cultural latinoamericano aparece como un proyecto en el que resta mucho por hacer. Poner en funcionamiento un nuevo y mayor activismo de los Estados que alienten políticas públicas de largo plazo, con esquemas de cooperación, intercambio y asociación que compensen la situación de los países de menor desarrollo; impulsar la creación de estudios cuantitativos y cualitativos en torno a las industrias y bienes culturales con capacidad para dar cuenta de indicadores culturales que evalúen el sentido público de la cultura; crear observatorios culturales y redes que analicen y alimenten las políticas públicas; no sólo para sentar bases comunes de cooperación e intercambio sino también para fijar posiciones con respecto a la defensa de la diversidad cultural; equiparar y actualizar lo referente a legislación en materia de derechos de autor, tecnologías digitales, etc.; impulsar diversas políticas de inversión y fortalecimiento del sector a fin de generar no sólo una industria nacional sino una de alcance regional, en la que puedan integrarse los agentes económicos locales; crear programas de apoyo a las pymes; firmar acuerdos para la distribución y comercialización en un marco de libre circulación intraregional; impulsar una señal satelital o de canal abierto para la región; crear programas de educación que permitan no sólo consumir los bienes culturales sino por sobre todo tener capacidad para la apropiación crítica y la interacción con la diversidad; capacitar a gestores culturales y formar redes para en ambos casos favorecer una práctica sustentable de los procesos culturales; impulsar medidas de protección y promoción del patrimonio; hacer efectiva una democratización del acceso a la cultura digital; éstas son, entre otras cuestiones, aquellas que pueden servir para señalar algunas de las prioridades a la hora de avanzar en la consolidación del espacio cultural común.

Tras la solicitud realizada al ex presidente Fernando Enrique Cardoso en la Cumbre de Santo Domingo (2002), los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica han creado la Secretaría General Iberoamericana que hoy se encuentra en pleno funcionamiento. La SEGIB representa un importante paso en el proceso de institucionalización que está viviendo la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Con ella se abre una nueva etapa en un momento en que, cada vez más, los bloques geopolíticos se afirman como los actores globales contemporáneos. La

creciente institucionalización redundará sin dudas en un mayor impulso a las iniciativas ya existentes, otorgándoles otros espacios en los que proyectarse.

En su próxima reunión, esta vez en Uruguay, los Jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto considerar un proyecto de Carta Cultural Iberoamericana. La Carta Cultural no sólo afirma a Iberoamérica dentro de la diversidad cultural planetaria, sino que también sostiene y protege su propia multiplicidad, la que se encuentra presente al interior del espacio cultural iberoamericano. Por un lado, “aterriza”, concreta, en el espacio regional la Convención sobre la diversidad de las expresiones artísticas y culturales que se adoptara en la UNESCO en octubre de 2005, por otro, anticipa y promueve una red de cooperación que permita delinear el camino para vertebrar la mayor riqueza compartida.

En este sentido la Carta Cultural Iberoamericana representará una instancia a partir de la cual densificar y consolidar el entramado de este espacio cultural común. Ello, en definitiva, significa hacer de la fortaleza cultural, primero un principio de unidad y luego un factor estratégico para el desarrollo integral de la región.

Francisco PIÑÓN, Madrid, agosto de 2006.